



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA CIVIL

Medellín, catorce (14) de febrero de dos mil veintitrés (2.023).

RADICADO: 05001 31 03 013 2022 00265 01

Magistrado Ponente: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS

Asunto: Apelación de auto.

Demandantes: INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

Demandados: FONDO GANADERO DE SANTANDER S.A.

Extracto: La limitación al acceso a la administración, solo puede producirse en circunstancias específicamente previstas por el legislador, donde en todo caso, desde la misma admisión de la acción o con posterioridad a la misma, el juez está en el deber de integrar el litisconsorcio con el corresponda.
Tratándose de asuntos de interés general o que implique derechos colectivos, debe tenerse especial cuidado para garantizar el acceso a la jurisdicción, y considerando el principio *iura novit curia*. Revoca.

ASUNTO A TRATAR

Se resuelve el recurso de apelación formulado por la parte demandante, contra el auto calendado el doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2.022), proferido por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, previos:

ANTECEDENTES

En los términos de la Ley 56 de 1981, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. demandó al FONDO GANADERO DE SANTANDER S.A., en proceso dirigido a imponer servidumbre de energía eléctrica, sobre

el predio identificado con Matrícula Inmobiliaria 192-15094, del que como titular del derecho de dominio aparece registrada la demandada.

Por auto del 31 de agosto de 2.022 la *a quo* inadmitió la demanda, para que en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo, la demandante diera cumplimiento, entre otros, al siguiente requisito:

“1. De conformidad con el contenido de los artículos 84 y 85 del Código General del Proceso, deberá allegarse prueba de la existencia y representación de la sociedad demandada; toda vez que, una vez confrontado el RUES actualizado de ésta (Cfr. Archivo 05), junto a los anexos aportados, se aprecia que dicho ente social se encuentra liquidado desde el año 2019. Así, la parte actora deberá cumplir con aclarar este punto de la pretensión, logrando con el presupuesto formal de capacidad para ser parte, so pena de rechazo.”

A lo anterior, la actora se pronunció pretendiendo subsanar la demanda (archivo 09), pero mediante la providencia apelada se le rechazó tras considerarse que ante la inexistencia de la sociedad demandada producto de su liquidación, no se cumplía con el presupuesto “*capacidad para ser parte*”, sin que sea válido vincular al liquidador, toda vez que sus funciones cesaron con la aprobación de la correspondiente acta.

Frente a tal decisión la actora interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación, indicando que conforme jurisprudencia del Consejo de Estado, la sociedad liquidada conserva la capacidad jurídica ante las autoridades administrativas y judiciales, por situaciones que se prologuen después de la liquidación del patrimonio social, y en defensa del pacto social.

Que si se conserva la capacidad jurídica para comparecer a juicio, también se mantiene para la reclamación de obligaciones a su favor, siendo quien fungió como liquidador el legitimado para realizar los

actos, en consideración a la responsabilidad que le asiste hasta por cinco (5) años, según lo establece el artículo 256 del C. de Co..

Finaliza indicando que la prestación del servicio público de energía eléctrica, es un servicio público esencial, existiendo la servidumbre eléctrica de pleno derecho, pero su imposición debe hacerse por la vía judicial, donde desconocer su rango Constitucional obstaculiza el adelantar las obras necesarias para su prestación.

Resolviendo el recurso horizontal, la *a quo* reiteró que la persona jurídica demandada dejó de existir desde la aprobación y registro de la cuenta final de liquidación, por tanto carece de capacidad jurídica para ser parte en el proceso. Así mismo, indicó que la demanda se debía dirigir frente a quien verdaderamente se verá afectado con la servidumbre, no siendo la sociedad extinta ni su liquidador los perjudicados, por lo que sería un despropósito desde el derecho de defensa afectar derechos de terceros.

Por último, que no se está desconociendo la relevancia constitucional del trámite, sino que se está salvaguardando el derecho al debido proceso de las partes que hubieren podido integrar el contradictorio.

Así las cosas, por tratarse de una providencia apelable según lo normado en los artículo 90 y 321.1, ambos del C. G. del P., se procede a resolver de plano la alzada dentro del principio de la limitación que imponen los artículos 326 y 328 del mismo ordenamiento, previas:

CONSIDERACIONES

Del artículo 320 del C. de G. del P. se tiene que la apelación busca que el Superior estudie el asunto decidido en primera instancia, con el fin

de revocarlo o reformarlo, sentido en el cual se dirigirá el siguiente análisis, recordándose que según el artículo 90 ídem, el recurso contra el auto que rechace la demanda comprende su inadmisión.

En cuanto a la inadmisión de la demanda y su objetivo de cara al acceso a la administración de justicia, la Corte Constitucional ha indicado:

“Al regularse de manera específica el estatuto procesal se contempló una serie de requisitos, con el fin de evitar un desgaste en el aparato judicial, pues en cierta medida lo que se pretende, es garantizar el éxito del proceso, evitando un fallo inocuo, o que la presentación de un escrito no involucre en sí mismo una controversia, es decir que no haya una litis definida.”. Sentencia C-833/02.

Es decir, que la inadmisión tiene pleno respaldo normativo, para precisamente garantizar el debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia¹, además que con ello se evitan vicios procesales y se estimula el avance del proceso con la celeridad del caso (artículos 42.5, 42.1 del C. G. del P. y 4º Ley 270 de 1.996).

En las presentes se rechazó la demanda, que es el asunto que nos ocupa (y *ope lege* su inadmisión), considerándose que como se estaba demandando a una persona jurídica liquidada, por ende, no existe, en consecuencia se carece de capacidad para ser parte por pasiva.

Lo anterior es cierto en principio, pues efectivamente se trata de una persona jurídica liquidada a quien se demanda; sin embargo, antes de la liquidación de la misma, esta figuraba como propietaria del predio

¹ En este punto, en la jurisprudencia primeramente citada, se dijo que: *“El artículo 229 de la Constitución garantiza el derecho que tiene toda persona de acceder a la administración de justicia, con el fin de solicitar la protección, reconocimiento o el reestablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Se está consagrando la posibilidad de todas las persona de acudir libremente a la jurisdicción siendo parte de un proceso, promoviendo la actividad jurisdiccional con el fin de obtener una decisión final, y ello implica obviamente la existencia de pretensiones legítimas en cabeza de quienes accionan el aparato de la justicia.”.*

que se pretende gravar con servidumbre, para lo que basta ver el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria arrimado con la acción.

Y es que debe recordarse que en este tipo de trámites, imposición de servidumbre, además de las normas especiales entre las que está primeramente la ley 56 de 1981 el que en su artículo 27 remite al Estatuto Procesal Civil, este último según su artículo 376 deja en claro que “*se deberá citar a las personas que tengan derechos reales² sobre los predios dominante y sirviente*”, en este caso, será por pasiva este último.

En esos términos, el único figurante en el folio de matrícula inmobiliaria pertinente, es a quien se demandó; ¿pero qué pasa si quien figura como titular del derecho real de dominio es una persona jurídica liquidada con probación de la cuenta final de la liquidación?; más delicado aún, ¿tal situación del bien hace que se deba negar el acceso a la administración de justicia de quien pretende imponer la servidumbre?

Las respuestas no son fáciles, precisamente a la luz del artículo 53 procesal civil³, en razón que la persona jurídica liquidada, ya no existe; sin embargo, en términos kelsenianos “... *las lagunas en el derecho son imposibles ya que toda conducta está expresamente prescripta o*

² Según el inciso 2º del artículo 665 del C.C. “*Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales.*”

³ Conforme el artículo 53 del C. G. del P., pueden ser parte en un proceso:

- 1) Las personas naturales y jurídicas;
- 2) Los patrimonios autónomos;
- 3). El concebido, para la defensa de sus derechos; y,
- 4) Los demás que determine la ley. Seguidamente el artículo 54 dice que las personas jurídicas deben comparecer al proceso por medio de sus representantes legales.

negativamente permitida”⁴; es decir, que el ordenamiento jurídico en su amplitud y contexto ha de brindar la solución.

Entonces, una primera hipótesis, como quien figura como titular de derecho de dominio en el folio de matrícula inmobiliaria, visto en armonía con el correspondiente certificado de existencia y representación, es una persona jurídica liquidada, ello haría que el bien careciera de dueño, por lo que en los términos del artículo 675 del C.C. podría afirmarse que estamos frente a un bien baldío, por ende, son propiedad de la Nación, pues como dice tal norma; “*Son bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño.*”⁵.

Si ello fuera así, y tratándose de un bien baldío, a quien debería convocarse a resistir la pretensión sería a la “*Agencia Nacional de Tierras (ANT)*” Ente este que según el Decreto 2363 de 2015, entre sus funciones, tiene: “*11. Administrar las tierras baldías de la Nación, adelantar los procesos generales y especiales de titulación y transferencias a las que haya lugar, delimitar y constituir reservas sobre éstas, celebrar contratos para autorizar su aprovechamiento y regular su ocupación sin perjuicio de lo establecido en los parágrafos 5 y 6 del artículo 85 de la Ley 160 de 1994*”.

No obstante, la solución a la alzada no se da desde esa perspectiva, ya que viendo el certificado de existencia y representación legal del accionado FONDO GANADERO DE SANTANDER S.A. (archivo 09

⁴ PABLO E. NAVARRO, *Lagunas en el Derecho y casos irrelevantes*, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, Argentina (2020), haciendo cita de Kelsen, *Teoría Pura del Derecho*, 1979, pp. 55 y 254.

⁵ Obviamente, tal concepto es mucho más complejo, y aunque el tema central era el relacionado con la usucapión, la Corte Constitucional ha acometido el correspondiente estudio, para lo que en este momento apenas contamos con el comunicado 26 de tal Corporación (18 de agosto de 2022), el cual hace alusión a lo que será la sentencia de unificación 288 de tal año; claro está, sin perjuicio a lo que ya se había dicho en la sentencia T-488 de 2014.

folios 45-47), la aprobación de la cuenta final de liquidación de tal persona jurídica, se dio en asamblea extraordinaria accionistas del 23 de enero de 2019, la cual se registró en la Cámara de Comercio pertinente el 10 de diciembre de ese mismo año (ver folio 46 archivo 09), por lo que resulta plausible que se aplique el inciso 2º del artículo 256 del C. de Co., en cuanto a que; *“Las acciones de los asociados y de terceros contra los liquidadores prescribirán en cinco años a partir de la fecha de la aprobación de la cuenta final de la liquidación.”*, es decir, que el llamado a resistir es el liquidador, persona esta plenamente establecida en el certificado mencionado al inicio de este párrafo.

Si tal persona no estuviera en capacidad de comparecer, en esa eventualidad cuenta con un suplente, y en todo caso, procederá el remplazo en los términos de ley.

Es decir, de la norma citada en el párrafo tras anterior, se tiene que después de aprobada la cuenta final de la liquidación, ciertamente la persona jurídica deja de existir, pero ello no excluye que subsistan acciones no solo de los asociados, sino también de terceros, frente a los liquidadores, acciones que se derivan de las obligaciones de estos de cara a la liquidación, entre las que están *“continuar y concluir las operaciones sociales pendientes...”*, ¿y que más pendiente que la posibilidad de liquidaciones adicionales de las previstas en los procesos liquidatorios?

Ahora, la imposición del gravamen por el que se demanda, también es un pendiente concomitante con la liquidación, ya que del documento figurante a folio 25 del archivo 10º, el *“PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA LOMA – SOGAMOSO 500KV”*, el cual desarrolla Interconexión Eléctrica S.A E.S.P. –ISA-, el mismo está *“en el marco del Plan de Expansión de Referencia Generación - Transmisión 2016-*

2030”, es decir, que inició en el año, 2016, por lo que antecedió a la aprobación de la cuenta final, que de contera genera un crédito, cuyo cobro está en cabeza del liquidador, tal como lo prevé el artículo 238.3 del C. de Co..

Aunado a lo anterior, el artículo 61 del C. G. del P., en cuanto al litisconsorcio necesario e integración del contradictorio, refiere:

“Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.”⁶. Subrayado intencional.

De lo anterior se tiene, particularmente del subrayado, que es factible que el actor no demande a todos a quienes corresponde, y pese a ello el Director del Proceso admitirá la demanda en integrará el contradictorio, regla que también contiene el artículo 90 del mismo ordenamiento procesal, cuando en relación al auto admisorio, indica: *“En la misma providencia el juez deberá integrar el litisconsorcio necesario”*, independientemente que se lo hayan indicado el actor.

Y es que en este caso el actor demandó a quien correspondía de acuerdo a un documento público como es el certificado de matrícula inmobiliaria, y confiando en la información Estatal no tenía por qué

⁶ Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia en Sala Civil, enunció: “A su vez el artículo 61 del Código General del Proceso prevé que si un pleito versa sobre «actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas», añadiendo a renglón seguido que de todas maneras en el auto admisorio el juez de conocimiento deberá disponer la vinculación de «quienes falten para integrar el contradictorio» y, que de no haberse advertido oportunamente, se «dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia.”, sentencia SC2496-2022. 10 de agosto de 2022.

suponer que tuviera que accionar respecto a otro, aunque ello fue parcialmente dilucidado en el presente.

Es importante considerar que estamos ante asunto en el que se pretende la imposición de una servidumbre eléctrica, procedimiento que se encuentra consagrado en las Leyes 126 de 1.938 y 56 de 1.981, esta última compilada en el Decreto 1073 de 2.015.

A propósito del Decreto 1073 de 2.015, este en cuanto a los procesos judiciales necesarios para imponer y hacer efectivo el gravamen de servidumbre pública de conducción de energía eléctrica, en su artículo 2.2.3.7.5.2., deja en claro que:

“La demanda se dirigirá contra los titulares de derechos reales principales sobre los respectivos bienes y deberá contener los requisitos establecidos en los artículos 82 y 83 del Código General del Proceso y a ella se adjuntarán solamente, los siguientes documentos:

“a) El plano general en el que figure el curso que habrá de seguir la línea de transmisión y distribución de energía eléctrica objeto del proyecto con la demarcación específica del área.

“b) El inventario de los daños que se causaren, con el estimativo de su valor realizado por la entidad interesada en forma explicada y discriminada, acompañado del acta elaborada al efecto.

“c) El certificado de matrícula inmobiliaria del predio.

“Cuando no fuere posible acompañar el certificado de registro de la propiedad y demás derechos reales constituidos sobre los inmuebles objeto de la servidumbre, en la demanda se expresará dicha circunstancia bajo juramento, que se entenderá prestado con la sola presentación de aquella.

“d) El título judicial correspondiente a la suma estimada como indemnización.

“e) Los demás anexos de que trata el artículo 84 del C. General del Proceso.”.

Es decir, que solo se previeron los anteriores como anexos documentales a la demanda, sin que se puedan exigir otros adicionales, precisamente, por la celeridad propia de este tipo de servidumbre, que ni siquiera admite excepciones, tal como indica el numeral 6º del artículo 2.2.3.7.5.3. del mismo Decreto, al que a continuación nos referiremos.

De cara al trámite en asuntos como el que nos ocupa, el artículo 2.2.3.7.5.3. del Decreto 1073 en referencia, deja en claro que con la sola admisión de la demanda, se ordena su inscripción en el Registro de Instrumentos Públicos del lugar de ubicación del inmueble, si esta petición ha sido formulada por el demandante, pero es más, de no allegarse con la acción el correspondiente certificado que de cuenta de la *“propiedad y demás derechos reales principales”*, se dispondrá *“el emplazamiento de todas las personas que puedan tener derecho a intervenir en el proceso”*, regla que en este asunto sería analógicamente ante la duda del dominio.

Además de lo anterior la misma norma deja en claro que *“4. El juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presentación de la demanda, practicará una inspección judicial sobre el predio afectado, identificará el inmueble, hará un examen y reconocimiento de la zona objeto del gravamen y autorizará la ejecución de las obras que de acuerdo con el proyecto sean necesarias para el goce efectivo de la servidumbre.”*; es decir, que la norma tiene un perfil tan eminentemente dirigido a proteger el interés público o social, que independientemente de la admisión, da el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presentación de la demanda, para que se autorice realizar obras y materializar la servidumbre deprecada. A ello no encontramos otra interpretación.

También la misma disposición deja en claro que las únicas inconformidades admisibles están relacionadas con *“el estimativo de los perjuicios”* (numeral 5º), previendo cómo se hará el avalúo de los mismos, pues como se dijo anteriormente; *“En estos procesos no pueden proponerse excepciones.”*.

Como corolario, en los procesos de servidumbre pública de conducción de energía eléctrica, lo que se busca es garantizar la prestación de un

servicio público esencial⁷ derivado de la interconexión eléctrica⁸, que como fin social del Estado, se debe asegurar en todo el territorio de manera eficiente, ininterrumpida y de calidad, por lo que constituye una cuestión de interés general, obligatoria y de utilidad pública⁹.

Y es que no puede dejarse de lado que la Ley 2099 de 2021¹⁰, prioriza trámites como el que nos ocupa, al punto de en su artículo 37 numerados 2 y 3, indica:

“ii. Faculta para que el juez autorice el ingreso al predio y la ejecución de las respectivas obras en los procesos de servidumbre pública de conducción de energía eléctrica sin realizar previamente la inspección judicial. Para este propósito se faculta a las autoridades policivas a garantizar la efectividad de la orden judicial.

“iii. Se autoriza al titular, poseedor o herederos del predio en el que se realizarán obras de conducción de energía eléctrica a suscribir -un acuerdo de intervención voluntario sobre el respectivo inmueble, lo que posibilita el inicio del proyecto requerido, sin perjuicio de que el responsable del proyecto continúe el proceso de enajenación voluntaria, expropiación o servidumbre, según corresponda.”.

Es decir, la materialización de la servidumbre se torna de interés público, por lo que debe aplicarse el artículo 58 Constitucional, en cuanto a que; *“el interés privado deberá ceder al interés público o social”*, pues en todo caso procede la entrega anticipada de la franja de terreno, ello sin perjuicio que posteriormente se discuta el monto de la indemnización.

⁷: *“Servicios públicos esenciales. Para los efectos de la correcta aplicación del inciso primero del artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, todos los servicios públicos, de que trata la presente ley, se considerarán servicios públicos esenciales”* (artículo 4 de la ley 142 de 1994)

⁸ *“La generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad están destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente; por esta razón, son consideradas servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y solidario, y de utilidad pública”* (artículo 5 Ley 143 de 1994).

⁹ *“Declárase de utilidad pública e interés social los planes, proyectos y ejecución de obras para la generación, transmisión, distribución de energía eléctrica, acueductos, riego, regulación de ríos y caudales, así como las zonas a ellos afectadas”* (artículo 16 ley 56 de 1982).

¹⁰ *“Por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado energético, la reactivación económica del país y se dictan otras disposiciones.”*

Así las cosas, y partiendo de la relevancia que reviste dicho procedimiento por el fin que persigue, resulta nítido que debe procurarse su celeridad y preferencia, pues de sus resultados dependen obras necesarias para la prestación de un servicio público esencial, claro está, sin que ello implique desconocer el también derecho de rango constitucional al debido proceso.

Es por esa razón que el Juez como Director del proceso debe tomar las medidas necesarias para impedir la limitación y que se haga nugatorio el derecho de acceso a la administración de justicia¹¹, máxime cuando de asuntos de interés general se trata.

Conforme lo precedente, en el caso en estudio, la liquidación de la sociedad que figura como titular del derecho de dominio del bien inmueble que se presente afectar con la servidumbre, no puede constituir motivo de rechazo de la demanda, pues de entrada ya tenemos por establecido un eventual resistente -el liquidador-, sumado que en el decurso procesal se advierta la necesidad vincular a otros, según lo que se otee *in situ*, o según se desprenda del estudio de títulos que se realice.

Corolario de lo expuesto, habrá de revocarse el auto atacado, sin que se pueda rechazar la demanda por lo aquí debatido.

Por lo expuesto, el Tribunal:

RESUELVE

¹¹ Artículo 229 C.P.: “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.”

PRIMERO: REVOCAR el auto calendado el doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2.022), proferido por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, según lo motivado.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, vuelva el expediente al Despacho de origen para lo de su cargo. sin que se pueda rechazar la acción por la misma circunstancia aquí debatida. Sin costas.

Notifíquese:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Omar Bohórquez Vidueñas', written over a light blue horizontal line.

JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
MAGISTRADO